



Ciudad de México y San José, 5 de septiembre de 2019

Dr. Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ref.: CDH-12.449/335
Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México
Supervisión de cumplimiento de sentencia
Observaciones al decimotercer informe de cumplimiento del Estado

Distinguido Dr. Saavedra:

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) nos dirigimos a usted y, por su intermedio, a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, "Corte IDH", "Corte" o "Tribunal"), en nuestra calidad de representantes de las víctimas del caso de la referencia, con el fin de brindar nuestras observaciones al decimotercer informe de cumplimiento del Estado, de fecha 6 de agosto de 2019.

B. Registro de detenciones

El punto resolutivo decimosexto de la Sentencia señala que el Estado debe adoptar medidas para fortalecer el funcionamiento del registro de detención que existe en México. En particular, en los términos dispuestos por la Corte, dicho fortalecimiento debería incluir cuatro puntos: (1) actualización permanente; (2) interconexión de la base de datos de dicho registro con las demás existentes, de manera que se genere una red que permita identificar fácilmente el paradero de las personas detenidas; (3) garantía que dicho registro respete las exigencias de acceso a la información y privacidad; e (4) implementación de un mecanismo de control para que las autoridades no incumplan con llevar al día este registro⁴.

Tal como informa el Estado en su decimotercer informe⁵, el 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Nacional del Registro de Detenciones (“Ley”)⁶, misma que ordena la creación de un Registro Nacional de personas detenidas por las instituciones de seguridad pública, a implementarse de forma gradual de aquí a abril de 2021 (trans. 6°).

El 26 de junio de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Acción de

² Escrito de las organizaciones representantes, 5 de febrero de 2019, p. 5-8.

³ Decimotercer informe de cumplimiento del Estado, 6 de agosto de 2019, párr. 8.

⁴ Corte IDH. *Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 243.

⁵ Decimotercer informe de cumplimiento del Estado, 6 de agosto de 2019, párr. 11-16.

⁶ **Anexo 1.** Ley Nacional del Registro de Detenciones. También disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNRD_270519.pdf.

Inconstitucionalidad 63/2019 contra la mencionada Ley⁷. Dicha Acción está pendiente de resolver.

Respecto de los cuatro elementos contemplados en la medida de reparación ordenada por esta Honorable Corte, se advierte lo siguiente del texto de la Ley recién adoptada:

(1) Actualización permanente:

La Ley prevé un proceso de actualización del Registro en cada etapa de la privación de la libertad.

(2) Interconexión:

Se prevé la interconexión de los datos de todas las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y penitenciarias.

Al mismo tiempo, la Ley aborda las obligaciones de las Fuerzas Armadas con un lenguaje confuso, fragmentado entre el artículo 19⁸ y el artículo quinto transitorio⁹. Por esta razón, la CNDH impugnó la constitucionalidad de la Ley al considerar “que las normas admiten al menos, dos interpretaciones por lo que no se acota de forma adecuada la actuación de dichas autoridades”¹⁰. A saber:

“permiten interpretar, al menos en los siguientes dos sentidos:

A. Cuando la Fuerza Armada permanente realice tareas de seguridad pública, no tiene la obligación de dar aviso inmediatamente de la detención a la autoridad policial competente ni de brindar la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente.

⁷ CNDH, Demanda de Acción de Inconstitucionalidad 63/2019, <https://www.cndh.org.mx/tipo/209/accion-de-inconstitucionalidad>.

⁸ “Cuando la detención se practique por autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, deberán dar aviso, inmediatamente, de la detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente, en términos de lo establecido por esta Ley”. **Anexo 1.** Ley Nacional del Registro de Detenciones, art. 19.

⁹ “De conformidad con el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, la Fuerza Armada permanente que realice tareas de seguridad pública estará sujeta a lo dispuesto en la presente Ley; en este caso, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 19”. *Ibíd.*, trans. 5°.

¹⁰ CNDH, Demanda de Acción de Inconstitucionalidad 63/2019, p. 29, <https://www.cndh.org.mx/tipo/209/accion-de-inconstitucionalidad>.

B. Por otra parte, también se puede entender que las fuerzas militares son las autoridades obligadas a realizar el registro de la detención”¹¹.

Como se puede apreciar, en una de las posibles interpretaciones de la Ley, las Fuerzas Armadas están obligadas a registrar las detenciones que lleven a cabo; esta interpretación nos parece la más adecuada y ciertamente es la única compatible con las obligaciones del Estado mexicano de acuerdo a la sentencia interamericana que nos ocupa. No obstante, en este momento está pendiente de resolverse por la SCJN si el lenguaje de la Ley en efecto obliga a las Fuerzas Armadas de manera clara o si admite la otra interpretación identificada por la CNDH, en la que “válidamente puede interpretarse que no se llevará registro alguno de las detenciones ejecutadas por la Fuerza Armada permanente”¹².

Por otro lado, la Ley dispone en otro artículo transitorio la creación de “un registro de personas migrantes detenidas que cuente con las mismas garantías procesales, de protección y de seguridad que las previstas en la presente Ley” (trans. 8°). Así, entendemos que existirán dos registros, uno para personas migrantes y otro para no migrantes; sin embargo, no entendemos cómo se operará el registro de personas migrantes detenidas, puesto que el Estado mexicano considera que los y las migrantes en detención administrativa (ej. en Estaciones Migratorias) no están “detenidos” sino “presentados” y “alojados temporalmente”¹³.

(3) Respetar las exigencias de acceso a la información y privacidad:

El artículo 9 de la Ley establece que el tratamiento de los datos personales que contenga el Registro Nacional será conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales y que “deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera”¹⁴.

Sin embargo, la Ley no cumple el requisito de acceso a la información en casos de personas detenidas acusadas de delincuencia organizada. Mientras el Sistema de Consulta del Registro Nacional permitirá a las personas interesadas saber dónde está detenida una persona acusada de delincuencia común o privada de libertad por otro motivo, no es así en el caso de personas acusadas de delincuencia

¹¹ *Ibíd.*, p. 32.

¹² *Ibíd.*, p. 34.

¹³ Ley de Migración, art.3.X y 3.XX, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_030719.pdf.

¹⁴ En México, la protección de datos personales se rige por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPSO.pdf>) y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf>).

organizada, pues en este último caso “solo estará disponible la información sobre la fecha de la detención y si la persona se encuentra detenida”¹⁵.

Así, no se permitirá saber en qué etapa de detención se encuentra la persona, bajo custodia de qué autoridad, si existe una demora que pudiera apuntar a una situación de riesgo de violaciones a derechos humanos, ni la ubicación física y geográfica de la persona. Este último dato es necesario para visitar a la persona, verificar su estado de salud y realizar otras gestiones tendientes a proteger sus derechos humanos. La falta de información representará no solamente un obstáculo para la protección de las personas detenidas, sino también generará angustia para ciertas familias al no poder localizar a su familiar.

El restringir el acceso a la información en casos de supuesta delincuencia organizada puede impactar de manera importante en la eficacia del Registro como herramienta de protección de la integridad personal, pues datos de la historia reciente demuestran que las personas acusadas por cargos de delincuencia organizada corren un alto riesgo de sufrir tortura o maltrato, incluyendo con el fin de fabricar declaraciones bajo coacción¹⁶. Lo anterior se ha relacionado, entre otros, con la participación de fuerzas federales, incluyendo del Ejército y de la Marina, en operativos de combate a la delincuencia organizada, tomando en cuenta que son las fuerzas con los mayores porcentajes de señalamientos por tortura y malos tratos¹⁷.

(4) Implementación de un mecanismo de control para que las autoridades no incumplan con llevar al día este registro:

Los mecanismos previstos en la Ley son la designación de personas enlaces en cada una de las instituciones de seguridad pública para coordinar el envío de

¹⁵ “El Sistema de Consulta, en su caso, emitirá el reporte correspondiente de la persona detenida, el cual deberá contener al menos lo siguiente: I. La autoridad o institución que efectuó la detención; II. La autoridad que tiene a su disposición a la persona detenida; III. El domicilio del lugar donde se encuentra la persona detenida, y IV. Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención. Tratándose de delincuencia organizada solo estará disponible la información sobre la fecha de la detención y si la persona se encuentra detenida”. **Anexo 1.** Ley Nacional del Registro de Detenciones, art. 34.

¹⁶ Para mencionar un solo ejemplo, el último informe publicado por el Centro Prodh sobre tortura documentó 29 casos (en este caso, de mujeres torturadas sexualmente y acusadas con pruebas ilícitas), en los que “La mayoría de los delitos que se les imputan son las distintas modalidades de delincuencia organizada...” Centro Prodh, *Mujeres con la Frente en Alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado* (2018), p. 46, <https://centroprodh.org.mx/2018/11/21/mujeres-con-la-frente-en-alto-informe-sobre-la-tortura-sexual-en-mexico-y-la-respuesta-del-estado/>.

¹⁷ Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México al Comité Contra la Tortura de la ONU 2012-2019, p. 24-26, https://www.omct.org/files/2019/04/25320/informe_conjunto_oscs_mexico_cat2019.pdf.

información al Registro Nacional (art. 11.V) y la posibilidad de perseguir penalmente al funcionario “quien dolosa y reiteradamente se abstenga de proporcionar... la información que esté obligado... a pesar de ser requerido por la autoridad correspondiente, dentro del plazo” de 30 días naturales (art. 11.VI, mismo que remite al art. 138 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública¹⁸). Asimismo, la Ley establece que las instituciones de procuración de justicia darán vista de la omisión de los agentes de seguridad pública de registrar inmediatamente una detención (art. 21, párr. 2).

Sin embargo, preocupa que la Ley contemple la posibilidad de justificar la no realización del registro de la detención “Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro” (art. 21, párr. 3).

Por otro lado, la nueva Ley representa un retroceso en los elementos a incluir en el registro inmediato de la persona detenida, pues al mismo tiempo que se adoptó la Ley Nacional del Registro de Detenciones, se modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para eliminar el requisito, antes vigente, de tomar fotografías a color de la persona detenida de frente y de perfil, y una fotografía panorámica del lugar de la detención¹⁹.

Ahora bien, tal como informa el Estado, la Ley establece un plazo “de 180 días para la emisión de las disposiciones jurídicas, así como para la integración del Registro Nacional de Detenciones e instalar el Sistema de Consulta”²⁰. Otro artículo transitorio establece que el Registro se implementará de forma escalonada para estar en pleno funcionamiento hasta abril de 2021 (trans. 6°). Así, durante las siguientes fases de construcción y operación del Registro -y de posible modificación de la norma a la luz de los resultados de la Acción de Inconstitucionalidad 63/2019-, empezaremos a contar con datos para saber si la Ley se está cumpliendo de acuerdo a su letra y espíritu, y en particular:

- Si la SCJN entiende que la Ley obliga a las Fuerzas Armadas a registrar las detenciones que lleven a cabo, o si prevalece una interpretación distinta;
- Si la posibilidad de justificar el no registro de una detención alegando ‘imposibilidad’ se constituye en un obstáculo para la protección de derechos humanos;

¹⁸ Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_270519.pdf.

¹⁹ Comparar la versión anterior de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, art. 113 (ver http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsnsp/LGSNSP_ref08_26jun17.pdf, p. 21) y la reforma efectuada a dicha norma el mismo día que se publicó la Ley Nacional del Registro de Detenciones (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgsnsp/LGSNSP_ref09_27may19.pdf, p. 47). La nueva Ley Nacional del Registro de Detenciones requiere la inclusión de una fotografía de la persona detenida hasta después de haber sido puesta a disposición de las instituciones de procuración de justicia, no desde el momento y lugar de la detención (ver art. 18 y 23.I(k)).

²⁰ Decimotercer informe de cumplimiento del Estado, 6 de agosto de 2019, párr. 14.

- Si los mecanismos contemplados para responsabilizar a funcionarios por incumplir con el Registro se aplican en la práctica.

Asimismo, esta representación considera que es importante que el Congreso reforme el artículo 34 de la Ley lo más pronto posible para eliminar la disposición que restringe el acceso a información básica sobre las detenciones de personas posteriormente acusadas por delincuencia organizada, elemento que desde este momento hace imposible que el Registro cumpla la medida de reparación ordenada por la Corte Interamericana.

En ese sentido, solicitamos atentamente al Alto Tribunal que considere que aún no se ha cumplido totalmente con el punto resolutivo decimosexto de la Sentencia y que continúe supervisando su cumplimiento.

C. Capacitaciones

En su decimotercer informe, el Estado ofrece información de seguimiento sobre programas de capacitación²¹. La medida de reparación referida por el Estado fue declarada totalmente cumplida por esta Corte²², por lo que no ofrecemos observaciones sobre la información de seguimiento aportada, si bien nos encontramos dando seguimiento a los temas referidos mediante otros procesos y espacios a nivel nacional.

Por otra parte, saludamos el compromiso expresado por el Estado de cumplir cabalmente la Sentencia que nos ocupa, esperando poder avanzar a cabalidad en los puntos pendientes de cumplimiento²³.

II. **Petitorio**

Con base en lo anteriormente expuesto, esta representación respetuosamente solicita a la Honorable Corte que:

Primero. Tenga por presentadas nuestras observaciones al decimotercer informe de cumplimiento del Estado.

Segundo. Continúe supervisando el cumplimiento de todas las medidas pendientes de cumplimiento, incluyendo las dos analizadas en el presente escrito.

²¹ *Ibíd.*, párr. 17-21.

²² Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de agosto de 2013, punto resolutivo 1.c.

²³ Decimotercer informe de cumplimiento del Estado, 6 de agosto de 2019, párr. 22.

Tercero. Inste al Estado a cumplir con todas las medidas de reparación ordenadas por la Honorable Corte en el menor plazo posible.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de nuestra más alta consideración,

Atentamente,



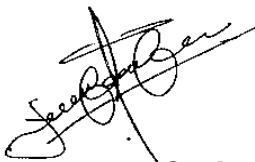
Stephanie Erin Brewer
Centro Prodh



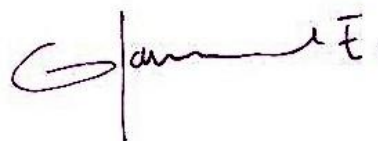
Luis Tapia Olivares
Centro Prodh

P/Claudia Paz y Paz

Claudia Paz y Paz
CEJIL



Vanessa Coria
CEJIL



Eduardo Guerrero
CEJIL



LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES

TEXTO VIGENTE

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :

SE EXPIDE LA LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES.

Artículo Único. Se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones

LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional. Tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

- I. Centro Nacional de Información:** el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
- II. Instituciones de seguridad pública:** a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias o entidades encargadas de la seguridad pública de orden federal, local o municipal, a que se refiere el artículo 5, fracción VIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las competentes para conocer y sancionar las infracciones administrativas, en sus respectivas competencias;
- III. Ley:** la Ley Nacional del Registro de Detenciones;
- IV. Persona detenida:** la persona privada de la libertad por parte de una autoridad integrante de alguna de las instituciones de seguridad pública, por cualquiera de los siguientes supuestos: detención en flagrancia, orden de aprehensión, caso urgente, retención ministerial, prisión preventiva, encontrarse cumpliendo pena o por arresto administrativo;
- V. Registro:** al Registro Nacional de Detenciones;



- VI. Secretaría:** a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana;
- VII. Sistema de Consulta:** al Sistema de Consulta del Registro Nacional de Detenciones, y
- VIII. Sujeto Obligado:** servidor público que por motivo de su empleo, encargo o comisión intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro.

Artículo 3. El Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal o del procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente. Dicho Registro será administrado y operado por la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan.

Artículo 4. El Registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública y tiene por objetivo prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.

Las bases de datos contenidas en el Registro podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Centro Nacional de Información y conforme a las leyes aplicables.

Artículo 5. Con independencia de lo establecido en el artículo 3 de esta Ley, la Secretaría contará con un Sistema de Consulta del Registro que permita, a través de herramientas tecnológicas, consultar una versión pública de la información de las detenciones practicadas por las instituciones de seguridad pública, conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 6. El número de registro de la detención que otorgue el Sistema de Consulta tendrá la finalidad de establecer el seguimiento a la persona detenida, hasta que es puesta en libertad por parte de la autoridad competente en cualquiera de las etapas del proceso penal o administrativo.

Capítulo II

Principios que rigen el Registro Nacional de Detenciones

Artículo 7. Las autoridades con acceso al Registro se regirán por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez, lealtad, imparcialidad, proporcionalidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y responsabilidad en el tratamiento de datos personales y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 8. Las disposiciones de esta Ley se interpretarán de modo que no restrinjan ni menoscaben los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte.

Capítulo III

Tratamiento de los Datos Personales de la Persona Detenida

Artículo 9. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida por parte de los sujetos obligados que deban intervenir en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de información del Registro, deberá sujetarse a las obligaciones que la normatividad aplicable le confiera



en materia de protección de datos personales. Todo tratamiento de datos personales deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.

Artículo 10. El sujeto obligado que intervenga en la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra el Registro, deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, completos, correctos y actualizados, los datos personales en su posesión. Se presume que son ciertos los datos personales cuando estos son proporcionados directamente por la persona detenida hasta en tanto se acredite lo contrario.

Capítulo IV Administración y Operación del Registro

Artículo 11. La Secretaría será la instancia encargada de la administración y operación del Registro y tendrá las siguientes facultades:

- I. Administrar, manejar, almacenar, concentrar, interconectar y conservar, de acuerdo con las disposiciones aplicables, la información que deba integrarse al Registro y que sea proporcionada por las instituciones de seguridad pública, en términos de esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables;
- II. Implementar, administrar y operar el Sistema de Consulta que permita acceder a través de herramientas tecnológicas a la versión pública del Registro;
- III. Establecer un padrón de sujetos obligados que cuenten con claves de acceso para la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información en el Registro, con base en las disposiciones jurídicas que al respecto se emitan;
- IV. Dar de alta las claves de acceso de los sujetos obligados que hayan sido autorizados para acceder al Registro, así como la baja de dichas claves, con base en las disposiciones que al respecto se emiten;
- V. Establecer el padrón de enlaces que las instituciones de seguridad pública designen como supervisores para el debido cumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, en cada una de las unidades administrativas de las instituciones de seguridad pública;
- VI. Requerir a las instituciones de seguridad pública la información relacionada al Registro, bajo el apercibimiento de que, en caso de no actualizar y enviar la información, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
- VII. Emitir las disposiciones necesarias para la adecuada captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información, mismos que deberán ajustarse a lo dispuesto por la normatividad aplicable en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales;
- VIII. Establecer y asignar las condiciones y perfiles de acceso de los sujetos obligados que hayan sido autorizados para acceder al Sistema, y
- IX. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 12. El Centro Nacional de Información emitirá los lineamientos para el adecuado funcionamiento, operación y conservación del Registro, para su uso homologado entre las instituciones



de seguridad pública; asimismo, podrá utilizar la información para realizar estudios especializados y para la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública. Los lineamientos deberán contener procedimientos para diferenciar el registro de detenciones entre hechos delictivos y faltas administrativas, así como para la administración, resguardo e implementación del Sistema de Consulta.

Capítulo V Niveles de Acceso a la Información del Registro

Artículo 13. La Secretaría desarrollará la plataforma tecnológica para la administración y operación del Registro y del Sistema de Consulta, las disposiciones para su uso y los elementos de seguridad que deberán incorporarse o contener los dispositivos que interoperen con la plataforma y resolverá sobre los incidentes que se generen en su implementación.

Artículo 14. La Secretaría definirá las condiciones y perfiles de acceso de los sujetos obligados autorizados para la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de información en el Registro, con base en las disposiciones jurídicas que al respecto se emitan. Los titulares de las unidades administrativas de las instituciones de seguridad pública solicitarán a la Secretaría las claves de acceso.

Artículo 15. La Secretaría implementará lineamientos de revisión y control, con el objeto de garantizar un adecuado uso y tratamiento de los datos personales, en términos de la ley en la materia.

Artículo 16. Las condiciones y perfiles de acceso al Registro serán determinados por la Secretaría, conforme a los siguientes niveles:

- I. **Administrador:** perfil orientado a sujetos obligados que tienen acceso a todas las opciones del Registro y que realizan funciones adicionales a las operativas, como es el caso de altas, bajas y cambios a catálogos, consultas, reportes especiales y configuración de funciones del Sistema;
- II. **Supervisor:** perfil orientado a sujetos obligados que realizan funciones de supervisión dentro del registro, con la finalidad de validar y revisar los trabajos del capturista;
- III. **Consulta:** perfil orientado a sujetos obligados que realizan funciones de consulta y generación de reportes dentro del Registro. Este perfil se podrá subdividir en consulta básica o completa, dependiendo de las funciones que realice el personal al que se le asigne este perfil;
- IV. **Capturista:** perfil orientado a sujetos obligados que realizan funciones de captura dentro del Registro, como es el caso de alta, baja o actualización de la información, así como consulta básica de información que le permita realizar las funciones descritas, y
- V. **Enlace Estatal o Institucional:** perfil orientado al personal que realiza las funciones de contacto y los trámites necesarios para la solicitud de cuentas de los sujetos obligados de todas las dependencias que se encuentren en la Entidad Federativa o de todas las áreas de su institución ante la Secretaría.

La plataforma del Registro emitirá alertas y bloqueos respectivos cuando los sujetos obligados manipulen de manera inusual los datos del registro o se violenten los privilegios de acceso.

Capítulo VI Procedimiento para el Suministro, Intercambio y Actualización de Información del Registro



Artículo 17. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención deberán realizar el registro de inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia, bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que al momento de la detención la autoridad no cuente con los medios para capturar los datos correspondientes en el Registro deberá informar, inmediatamente y por el medio de comunicación de que disponga, a la unidad administrativa de la institución a la cual se encuentre adscrito y que pueda generar el registro.

La ruta de traslado de una persona detenida podrá ser registrada mediante dispositivos de geolocalización. En caso de no contar con ellos, se procederá en términos de la fracción VI del artículo 23.

Artículo 18. El Registro inmediato sobre la detención que realiza la autoridad deberá contener, al menos, los siguientes elementos:

- I. Nombre;
- II. Edad;
- III. Sexo;
- IV. Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los motivos de la misma, así como si esta obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, detención por flagrancia, caso urgente o arresto administrativo;
- V. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, institución, rango y área de adscripción;
- VI. La autoridad a la que será puesta a disposición;
- VII. El nombre de algún familiar o persona de confianza, en caso de que la persona detenida acceda a proporcionarlo;
- VIII. El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones apreciables a simple vista, y
- IX. Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información que permitan atender el objeto de la presente Ley.

El Registro deberá realizarse sin demérito de que la autoridad que efectúe la detención cumpla con la obligación de emitir su respectivo informe policial y demás documentos a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 19. Cuando la detención se practique por autoridades que realicen funciones de apoyo a la seguridad pública, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, deberán dar aviso, inmediatamente, de la detención a la autoridad policial competente, brindando la información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente, en términos de lo establecido por esta Ley.

Artículo 20. Una vez ingresada la información de la persona detenida, el Registro generará un número de registro de la detención, mismo que deberá de constar en el informe policial que se entregue al Ministerio Público o a la autoridad administrativa correspondiente al momento de la puesta a disposición del detenido.

Artículo 21. Las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas, a quienes les sea puesta a disposición una persona detenida, procederán de inmediato a



actualizar la información en el Registro sobre la situación que guarda dicha persona bajo su custodia, utilizando como referencia el número de registro de la detención que la autoridad aprehensora hubiere especificado en el informe.

En caso de que no existiese un registro preexistente deberá iniciar uno; dejando constancia de la omisión o negligencia por parte de la autoridad, dando vista a la autoridad competente para determinar las responsabilidades que en derecho correspondan.

Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad aprehensora, bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha circunstancia. El Juez de control o la autoridad que corresponda, deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular.

Artículo 22. En los casos en que las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas no ratifiquen la detención realizada por la autoridad, inmediatamente después de decretar la libertad de la persona detenida se dejará constancia de ello y realizará la actualización de información en el Registro.

Artículo 23. La actualización de la información del Registro que lleven a cabo las instituciones de procuración de justicia o administrativas deberá contener, cuando menos, lo siguiente:

- I. Datos de la persona detenida, que serán:
 - a) Lugar y fecha de nacimiento;
 - b) Domicilio;
 - c) Nacionalidad y lengua nativa;
 - d) Estado civil;
 - e) Escolaridad;
 - f) Ocupación o profesión;
 - g) Clave Única de Registro de Población;
 - h) Grupo étnico al que pertenezca;
 - i) Descripción del estado físico de la persona detenida y nombre del médico que certificó o, en su caso, copia del certificado médico;
 - j) Huellas dactilares;
 - k) Fotografía de la persona detenida, y
 - l) Otros medios que permitan la identificación plena de la persona;
- II. Número de carpeta de investigación o expediente administrativo y, tratándose de reincidencia, delito por el que fue sentenciado y pena impuesta;
- III. Adicciones, estado general de salud, enfermedades o padecimientos crónicos o degenerativos;
- IV. Nombre y cargo del servidor público que actualiza el registro, así como área de adscripción;



- V. Día y hora de la liberación de la persona detenida o, en su caso, del traslado a otro lugar de detención;
- VI. Descripción mínima de la ruta sobre el traslado y la autoridad encargada del mismo;
- VII. Autoridad que recibe a la persona detenida, así como el día y hora de la recepción;
- VIII. En caso de fallecimiento durante la detención o privación de libertad, las circunstancias y causas del deceso y el destino final de la persona fallecida, y
- IX. Los demás datos que determine el Centro Nacional de Información conforme a sus atribuciones, que permitan atender el objeto de la presente Ley.

Artículo 24. El Registro guardará constancia de las actualizaciones de la información, con la finalidad de identificar al sujeto obligado que generó la actualización.

Artículo 25. Las instituciones de seguridad pública están obligadas a actualizar el Registro con la información de las personas detenidas que ingresen al sistema penitenciario, con base en el número de registro de la detención de origen. La actualización deberá vincularse con la base de datos a cargo de las autoridades penitenciarias que contengan la información de las personas privadas de su libertad.

Capítulo VII Consulta de Información

Artículo 26. Los titulares de las instituciones de seguridad pública fungirán como supervisores del debido cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 27. La Secretaría implementará los mecanismos de seguridad y de carácter operativo para el debido funcionamiento, autorización, cancelación y consulta del Registro, de conformidad con la presente Ley, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras disposiciones jurídicas que al efecto emita.

Artículo 28. Los sujetos obligados serán responsables de la captura, ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que integra este Registro en el ámbito de su competencia. Su violación se sancionará de acuerdo con la responsabilidad civil, penal o administrativa a que diera lugar, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 29. La plataforma tecnológica del Registro emitirá certificados digitales sobre los registros de las detenciones y las consultas que haga la autoridad conforme a sus atribuciones y perfiles de acceso. Dichos certificados servirán para acreditar la existencia y contenido del registro frente a cualquier requerimiento que formule la autoridad facultada para hacerlo. La veracidad de la información es responsabilidad de la autoridad que la genera.

La plataforma tecnológica del Sistema de Consulta también emitirá certificados digitales.

Artículo 30. La persona privada de la libertad y su representante legal, tendrán acceso a la información contenida en el Registro, de conformidad con los lineamientos que al efecto emita la Secretaría.

Capítulo VIII Sistema de Consulta del Registro Nacional de Detenciones



Artículo 31. El Sistema de Consulta del Registro es una herramienta tecnológica que permite a cualquier persona realizar una búsqueda sobre personas detenidas.

Artículo 32. El Sistema de Consulta del Registro estará a cargo de la Secretaría, la cual para su operación tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Implementar las herramientas tecnológicas para su debido funcionamiento;
- II. Almacenar y administrar la información, en términos de las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales, e
- III. Instrumentar las acciones de coordinación con los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los fines del Sistema de Consulta.

Artículo 33. Toda persona interesada podrá tener acceso al Sistema de Consulta, para lo cual deberá proporcionar los datos de la persona que desea localizar, en los términos que disponga la presente Ley y los lineamientos emitidos por la Secretaría.

Artículo 34. El Sistema de Consulta, en su caso, emitirá el reporte correspondiente de la persona detenida, el cual deberá contener al menos lo siguiente:

- I. La autoridad o institución que efectuó la detención;
- II. La autoridad que tiene a su disposición a la persona detenida;
- III. El domicilio del lugar donde se encuentra la persona detenida, y
- IV. Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención.

Tratándose de delincuencia organizada solo estará disponible la información sobre la fecha de la detención y si la persona se encuentra detenida.

Artículo 35. La Secretaría implementará las medidas de seguridad para el funcionamiento del Sistema de Consulta debiendo tratar los datos personales conforme a la legislación de la materia.

Artículo 36. Cuando una persona sea liberada por la autoridad correspondiente, en términos de ley, dentro de los cinco días siguientes será cancelada la información en el Sistema de Consulta; no obstante, quedará en el Registro de manera permanente.

El Registro no genera antecedentes penales.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá emitir las disposiciones jurídicas a que se refiere el artículo 13 de esta Ley, en un plazo máximo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero. La Secretaría deberá integrar el Registro Nacional de Detenciones e instalar el Sistema de Consulta, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. Los



datos y demás elementos del Registro Administrativo de Detenciones pasarán a formar parte del Registro Nacional de Detenciones.

En tanto no esté en operación el Registro Nacional de Detenciones, seguirá en funcionamiento el Registro Administrativo a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este Decreto se cubrirán con cargo al presupuesto de la Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados vinculados a la materia de la presente Ley.

Quinto. De conformidad con el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, la Fuerza Armada permanente que realice tareas de seguridad pública estará sujeta a lo dispuesto en la presente Ley; en este caso, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 19.

Sexto. En el Sistema Nacional de Seguridad Pública se deberán establecer programas para la debida instrumentación del Registro, en los cuales se deberá considerar la implementación gradual de acuerdo a lo siguiente:

- a) Para el caso de la información referente a los registros de detenciones en materia de delitos federales, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
- b) Para el caso de la información referente a los registros de detenciones en materia de delitos del fuero común, a más tardar al 1 de abril del año 2020.
- c) Para el caso de la información referente a los registros de detenciones de carácter administrativo, a más tardar al 1 de abril del año 2021.

La Federación, las entidades federativas y los municipios, dentro de los plazos señalados en este artículo, harán las provisiones necesarias para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones para un eficaz funcionamiento del Registro.

Séptimo. Las instituciones de seguridad pública procurarán contar con dispositivos de geolocalización para registrar la ruta de traslado de las personas detenidas en medida de sus posibilidades y su disponibilidad presupuestaria.

Octavo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las reformas necesarias a la Ley de Migración con el objetivo de crear un registro de personas migrantes detenidas que cuente con las mismas garantías procesales, de protección y de seguridad que las previstas en la presente Ley.

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2019.- Sen. **Martí Batres Guadarrama**, Presidente.- Dip. **Porfirio Muñoz Ledo**, Presidente.- Sen. **Nancy de la Sierra Arámburo**, Secretaria.- Dip. **Ma. Sara Rocha Medina**, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 27 de mayo de 2019.- **Andrés Manuel López Obrador**.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. **Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila**.- Rúbrica.